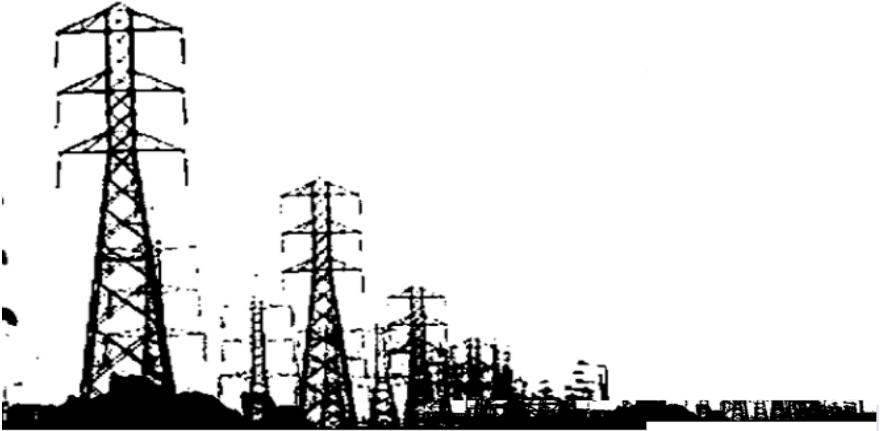


Cuenca de Elki—Primavera 2023

CUADERNOS DEL CAPITALOCENO



EDITORIAL



Tras el largo confinamiento pandémico, nos encontramos con el violento avance del colonialismo energético. En 2019, la revuelta debilitó al empresariado extractivista, pero este se rearmó y potenció su poder en tiempos de confinamiento, hasta lograr imponer una agenda neoliberal de transición energética, que este 2023 se materializa en una serie de proyectos asociados a la generación, almacenamiento y transmisión de energía; que penetran los territorios expandiendo la frontera extractivista. Esta agenda, asumida como política de estado, reordena los territorios configurando enclaves energéticos funcionales a los intereses de las sociedades energívoras del norte global.

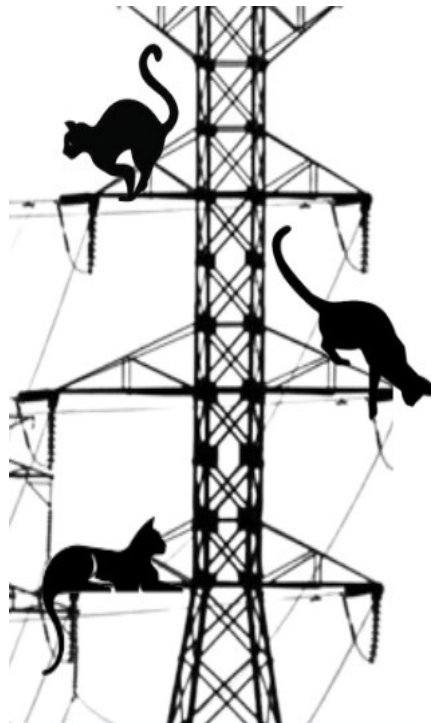
En tiempos del capitaloceno, la agenda de transición energética

habilita un eco-ajuste del capitalismo global, que se reinventa para rentabilizar la crisis climática. Desde el Colectivo El Kintral, consideramos urgente abordar el modelo realmente implementado de transición energética con una perspectiva crítica y situada. Por eso dedicamos este número de los cuadernos al análisis de las complejas articulaciones entre los proyectos minero-energéticos locales y la agenda global de transición energética.

Este cuaderno consta de seis textos. El primero, *Transición energética: una trampa del capitalismo energívoro*, presenta una visión general de las problemáticas asociadas al modelo de transición realmente implementado. El segundo, *Carretera eléctrica en Elki: otra ruta para la colonización y el*

sakeo, trata el proyecto Kimal-Lo Aguirre, una amenaza concreta al territorio que habitamos. El tercero, *La patria minera en las líneas de la transición energética*, vincula críticamente la agenda de transición energética con el régimen minero imperante en Chile. El cuarto, *Aguas para la 'minería verde': las trampas retóricas de la transición energética*, da cuenta de los impactos hídricos de la minería orientada a la transición. El quinto texto, *Chile: Extractivismo energético y agenda represiva*, analiza la agenda represiva del gobierno de Gabriel Boric como una estrategia contrainsurgente, asociada al avance de la frontera extractivista. Y finalmente, *Minera Barrick Gold: terricida y con denuncias en todo el mundo*, informa la trayectoria de la transnacional Barrick, empresa que actualmente amenaza la cuenca de Elki.

Los Cuadernos del Capitaloceno emergen de la rabia que nos genera el avance depredador de las dinámicas extractivista, y que canalizamos en un trabajo colectivo de investigación militante, que se rebela con rigurosidad metodológica y compromiso político a las cadenas de valor de los conocimientos mercantilizados y serviles. Desde el Colectivo El Kintral, pensamos estos cuadernos como una herramienta para el debate, una provocación al sentido común del progresismo neoliberal y una contribución humilde y solidaria a las múltiples luchas contra el capital y en defensa de la Tierra.



TRANSICIÓN ENERGÉTICA: UNA TRAMPA DEL CAPITALISMO ENERGÍVORO

Desde el siglo XX la expansión depredadora de las dinámicas capitalistas genera una intensa y compleja crisis sistémica que pone en riesgo la reproducción de la vida misma en la Tierra. Una de las dimensiones de esta crisis es la climática, asociada al calentamiento global producido por el consumo voraz de hidrocarburos. Ya en el siglo XXI, tras décadas de negacionismo, el empresariado transnacional y los gobiernos del capitalismo central reconocen el cambio climático como un problema global e instalan la agenda de transición energética, cuyo eje es la descarbonización de la matriz energética mediante el reemplazo de combustibles fósiles por energías renovables.

Si bien reconocemos la urgencia de la transición, consideramos que el modelo realmente implementado de transición energética opera como una trampa más del capitalismo energívoro, pues no resuelve la crisis climática y además renueva las dinámicas globales de despojo y acumulación. Entendemos los discursos oficiales de la transición energética como una eco-retórica capitalista, orientada a desactivar las potenciales resistencias que conlleva la

violenta expansión de las fronteras energéticas. En este sentido, el análisis crítico de las experiencias latinoamericanas nos lleva a plantear los siguientes argumentos:

(a) Las políticas de transición energética, solo diversifican los mercados energéticos.

Como ya se ha señalado, la transición energética supone el reemplazo de los combustibles fósiles por energías renovables, pero esto no está ocurriendo. Sobre este punto, reconocemos dos fenómenos articulados: En primer lugar, la exploración de nuevas fuentes y tecnologías para la explotación de hidrocarburos, asociada a la escasez relativa de las fuentes convencionales, llegan con los polémicos proyectos petroleros *offshore* o *costa afuera*, por un lado, que instalan plataformas en el mar para fracturar el fondo marino (como ejemplo están la cuenca atlántica de Argentina, pero también el Presal en Brasil y el Golfo en México); y por otro, la expansión del *fracking* o *fractura hidráulica* que quiebra la roca a una profundidad de hasta 5000 metros para succionar gotitas de petróleo (como el caso de Argentina y Colombia). En ambos casos se trata de tecnologías extremadamente invasivas, que amenazan los equilibrios ecológicos, y cuya implementación reconfigura los territorios.

En segundo lugar, la imposición de una agenda de descarbonización que se limita solo al carbón, y que por lo tanto habilita la promoción de 'hidrocarburos de transición'.

El caso emblemático es Chile, donde la política de descarbonización se focaliza en las termoeléctricas a carbón. Aunque inicialmente se anunció el cierre paulatino de estas centrales, la medida fue luego reemplazada por el anuncio de estrategias de reconversión al gas. Paradójicamente, se reemplaza un fósil por otro... Este año el estado chileno informó públicamente la adopción del gas como combustible de transición junto a la exploración de nuevas tecnologías para las termoeléctricas. Por una parte, este anuncio instala la demanda por

gas, presionando así territorios que cuentan con el recurso; y por otra, sigue sin resolver la situación de las zonas sacrificadas por las termoeléctricas. El de Chile no es de ningún modo un caso aislado.

Es importante aclarar que más allá de los discursos oficiales, la agenda global de transición energética es una respuesta a la escasez relativa de hidrocarburos, específicamente al *peak* o pico petrolero que marca el declive en su fácil disponibilidad y rápida extracción, lo que conlleva un aumento de los costos y también nuevos conflictos por el acceso de las fuentes tradicionales.



En este escenario no hay abandono voluntario de los hidrocarburos por motivos ecológicos, sino una reconversión adaptativa por parte del empresariado que así expande la frontera hidrocarbúfera con la intensión de resguardar la rentabilidad de sus negocios profundizando el desprecio ambiental.

A lo anterior se suma la promoción de energías renovables, principalmente no convencionales, que amplían y diversifican el mercado energético, pero es necesario enfatizar que el modelo impuesto de transición energética mercantiliza la energía, transformándola en un *comoditie* transable en los mercados globales, donde la supuesta carbono neutralidad de las renovables conlleva un valor agregado que potencia su rentabilidad.

Se activan así procesos de industrialización de gran escala, porque no se trata de energía eólica o solar orientada al autoabastecimiento familiar o comunitario, sino de mega-emprendimientos energéticos capaces de competir con las energías fósiles tradicionales. Es en este sentido que las plantas solares y eólicas diversifican la oferta de mercados energéticos donde la demanda va en constante aumento. No desplazan a los hidrocarburos, solo amplían la oferta energética cuando aquellos ya no son rentables.

(b) Ni sustentables, ni renovables

A nivel global, la agenda de transición energética promueve la reconversión a las llamadas energías renovables. En un primer momento el foco estuvo en las hidroeléctricas, luego en los biocombustibles, en ambos casos los efectos territoriales han devastado territorios y comunidades. Esto se constata en las experiencias hidroeléctricas de Brasil, Chile y Bolivia; y en la producción de biocombustible en Argentina, Brasil y Paraguay. Ahora el foco está en las llamadas renovables no convencionales, principalmente plantas eólicas y fotovoltaicas, que son presentadas como energías limpias, sustentables y carbononeutrales. Sobre este punto, es necesario diferenciar entre las energías solar y eólica que sí son renovables y tienen sus propias diná-



micas ecológicas, de los parques fotovoltaicos y eólicos que son artefactos captadores de esa energía. En tanto artefactos tecnológicos, estos no son renovables, pues su construcción y mantenimiento requiere cantidades enormes de minerales metálicos y no metálicos.

Efectivamente, la industrialización de fotovoltaicos y eólicos intensifica el extractivismo megaminero especialmente de cobre, considerado un mineral crítico para la transición, lo que ha activado un nuevo boom cuprífero en Chile, Perú y Argentina, y la entrada al negocio de Colombia y Ecuador. Pero también abre nuevos nichos de negocios asociados a otros minerales metálicos como el hierro y el cobalto, y no metálicos como el litio. En relación al cobalto, actualmente Chile explora los relaves mineros como potencial fuente de este mineral, con la intención de posicionarse como país exportador. En relación al litio, la alta demanda genera-

da por la transición energética ha significado una sobreexplotación de los salares altoandinos del lado chileno, y activado el voraz interés transnacional por explotar los salares del lado argentino. A lo anterior debemos agregar la *obsolescencia programada* de estos captadores de energía y la incertidumbre sobre su destino cuando quedan en desuso. Si estos minerales no son renovables y su explotación no es sustentable, entonces los artefactos que con ellos se producen, tampoco lo son.

Además, la escala de los proyectos fotovoltaicos y eólicos principalmente en Brasil y Chile, altera las dinámicas territoriales en múltiples sentidos: por una parte, altera los ciclos ecológicos al causar la muerte de aves y romper las cadenas bióticas; por otra, la extensión del área instalada conlleva desplazamientos de población, pues el territorio ya no está disponible para otras actividades productivas o bien afecta la salud física y mental de comunidades expuestas, por ejemplo, al permanente zumbido de los aerogeneradores. El avance de la transición energética genera así, enclaves energéticos donde territorios definidos por la razón capitalista como “espacios vacíos”, son refuncionalizados como meros productores de energía. Se trata de nuevas zonas de sacrificio, donde la vida ya no es posible.



(c) Infraestructuras para el saqueo que reconfiguran territorios

Plantas fotovoltaicas y campos eólicos son infraestructuras de *captación energética* que intervienen violentamente los territorios. Pero estas infraestructuras se articulan a *otras* infraestructuras de *conectividad* a través de las cuales circula y se distribuye la energía. Para entender la complejidad de este fenómeno, se debe precisar que el modelo realmente implementado de transición energética se enfoca en la electrificación del sistema, omitiendo otras posibilidades. La electrificación del sistema requiere tecnologías de almacenamiento, pues la captación de eólicos y fotovoltaicas es inestable por su propia naturaleza, es ahí donde el *litio* cobra protagonismo. Requiere así líneas de transmisión, estaciones y subestaciones eléctricas, cuya instalación también altera los ciclos ecológicos y dinámicas territoriales. Estas redes de infraestructura se construyen en base a minerales, principalmente *cobre*, lo que también potencia el avance de la mediana y gran minería, con todos los problemas que ello conlleva.

En el caso chileno, la intensión estatal de transformar al país en una “potencia de energías renovables no convencionales”, ha estimulado la inversión transnacional como negocio, generando una oferta de energía que no coincide con las capacidades de transmisión del sistema. Es ahí donde el estado interviene planificando, financiando y luego licitando a privados la construcción de mega carreteras eléctricas, entre las que destacamos las carreteras Cardones-Polpaico, ya ejecutada, y Kimal-Lo Aguirre, actualmente en proceso de evaluación ambiental, cuya extensión abarca desde Antofagasta a la Región Metropolitana. Las torres de alta tensión que conforman estas mega carreteras transforman los paisajes locales y generan radiaciones electromagnéticas que ponen en riesgo la salud, humana y no humana. Paralelamente, abren un nuevo mercado para las trasmisoras transnacionales que compiten por la licitación de las obras. Cabe señalar que, en el caso chileno, más allá de la competencia, las empresas generadoras y trasmisoras





han constituido gremios sumamente cohesionados desde los cuales potencian sus intereses privados. En Chile, las carreteras eléctricas operan como verdaderas rutas para el saqueo energético, en un sistema energético altamente concentrado y jerarquizado.

(d) La transición energética actualiza las dinámicas de colonización y reproduce la desigualdad estructural

La agenda global de transición energética es una agenda capitalista que responde a las necesidades de las sociedades energívoras del norte global. Las sociedades energívoras son sociedades adictas a los combustibles fósiles y la electrificación. En estas sociedades todos los ámbitos de la cotidianidad son dependientes de la tecnología, la que paradójicamente depende de materiales extraídos en otros territorios, que estas mismas sociedades han colonizado y subordinado. Hay que subrayar que las sociedades energívoras son un tipo particular de sociedad, pues el consumo depredador de energía no es una práctica intrínseca al animal humano. De hecho, a nivel global, las socieda-

des energívoras coexisten con sociedades que padecen la pobreza energética y otras donde la energía no tiene el rol central que el capitalismo le ha atribuido. Reconocer la desigualdad en el acceso a la energía, nos lleva a relativizar la escasez y crisis energética. Efectivamente, la agenda global de transición energética es una agenda diseñada para satisfacer las necesidades de las sociedades del capitalismo central, que al parecer no tienen intención de cambiar sus hábitos de consumo. Para estas sociedades el desafío es mantener sus ritmos de consumo, por eso el modelo de transición energética realmente implementado se basa en la innovación tecnológica, que privilegia la ecoeficiencia. Un ejemplo claro es la electromovilidad, símbolo de la sustentabilidad capitalista, pues ahí la electrificación del sistema permitiría mantener la misma dinámica de transporte. Como vemos, para las sociedades energívoras el problema es técnico, no ético ni político.

Pero para que esas sociedades resuelvan tecnológicamente sus problemas de abastecimiento, requieren materiales. Es ahí donde sociedades que han

sido colonizadas y subordinadas al orden capitalista, sustentan con sus bienes naturales y fuerza de trabajo la transición energética de las sociedades del norte global. Siguiendo con el ejemplo de la electromovilidad, son nuestros territorios los que proveen los minerales y la energía que la hacen posible, pero también son nuestros territorios los que padecen los pasivos ambientales que su explotación genera. Por eso no se puede asumir la transición energética como una propuesta de la humanidad para la humanidad. La transición energética es una propuesta situada en las sociedades del capitalismo central, que materializa un complejo proceso de colonialismo energético.

Para finalizar, es importante reiterar que los discursos oficiales sobre la transición energética operan como discursos legitima-

dores de nuevas formas de colonización que acentúan las desigualdades entre sociedades y al interior de estas. En ese sentido son *eco-retóricas capitalistas* que, por un lado, privatizan las ganancias de los nuevos negocios energéticos, y por otro, socializan las responsabilidades y culpas por la catástrofe climática. En América Latina el problema no es la escasez de energía, sino el acceso a ella y la autonomía para definir sus usos. Se trata de un problema de justicia y distribución. Esto no niega la urgencia de una transición, pero esta no puede limitarse a la descarbonización ni sustentarse en la innovación tecnológica, lo que se requiere es una transición civilizatoria, que reordene los vínculos humanos y con la Tierra.



CARRETERA ELÉCTRICA EN ELKI OTRA RUTA PARA LA COLONIZACIÓN Y EL SAKEO

La Política Energética Nacional, actualizada al 2022, pretende posicionar a Chile como un protagonista de la llamada Alianza de Ambición Climática. Para ello se propone una transición energética que permita la carbono-neutralidad antes del 2050, y de esa forma aportar con 'energías limpias' a la mitigación de emisiones de otros países. Con esta política se reconfiguran las dinámicas extractivistas bajo la lógica del capitalismo verde, que ve en la crisis climática global, la oportunidad de nuevos y rentables negocios.

La apuesta estatal es una matriz de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), principalmente solar y eólica, consideradas 'energías limpias' en los mercados globales, pero que a nivel local conllevan desplazamiento territorial, despojo, pérdida de biodiversidad y precarización de la vida humana. No se trata de energía gestionada comunitariamente, sino de mega-emprendimientos capitalistas que se imponen en los territorios.

Estos mega-emprendimientos requieren infraestructura de conexión, que asegure la rápida circulación de energía, sin esa infraestructura no serían rentables. Es ahí donde emergen las carreteras

eléctricas, que operan como corredores para la circulación de energía. En los últimos años, el negocio de las ERNC ha crecido vertiginosamente, y con ello la demanda de infraestructura para su circulación. Es en este contexto donde surge el proyecto HVDC Kimal-Lo Aguirre, que es presentado por autoridades y empresas como la iniciativa que hará viable la descarbonización en Chile.

Se trata de una red de transmisión que recorrerá casi 2.000 km entre las regiones de Antofagasta y Metropolitana y será la primera línea de corriente continua del país. El trazado de la línea de transmisión se emplaza en las comunas de María Elena, Sierra Gorda, Antofagasta, Taltal, Diego de Almagro, Copiapó, Tierra Amarilla, Vallenar, La Higuera, La Serena, Vicuña, Andacollo, Río Hurtado, Ovalle, Punitaqui, Combarbalá, Canela, Illapel, Los Vilos, Petorca, Cabildo, La Ligua, Catemu, Panquehue, Llay Llay, Tiltil, Lampa y Pudahuel.

La mega-obra será ejecutada por el consorcio Yallique, formado por (a) Transelec, el principal consorcio de transmisión de energía en Chile, operado por los fondos canadienses Canadian Pension Plan Investment Board (CPP), British Columbia Invest-

ment Management Corp. (bcIMC) y Public Sector Pension Investment Board (PSP), (b) ISA Interchile, traslatina colombiana, segunda empresa líder del rubro en el país, conocida por ejecutar el polémico proyecto ‘Cardones-Polpaico’, que abrió el ciclo de movilizaciones contra las torres de alta tensión en Chile, y (c) China Southern Power Grid International, empresa estatal china, líder mundial del rubro, que desde el año 2017, cuenta con el 27,7% de las acciones de Transelec.

Según contrato, la obra debe estar finalizada el 2029, pues de ello depende la viabilidad de muchos proyectos de ERNC. El proyecto HVDC Kimal- Lo Aguirre, es un proyecto funcional a las dinámicas de acumulación capitalista, que hará viable el despojo y colonización de amplios territorios, no solo por donde se instalen las torres, también en las plantas fotovoltaicas, eólicas y otras.

Territorios que serán sacrificados por sus características climáticas y geográficas, entendidas por la lógica mercantil como ‘ventajas comparativas’, territorios donde la naturaleza humana y no humana ha interactuado por tiempos inmemoriales, y que hoy son sacrificados para ‘mitigar’ y ‘compensar’ el desarrollo depredador de las sociedades del norte global, que seguirán contaminando; y también para alimentar la rentabilidad de los emprendimientos extractivistas que devas-

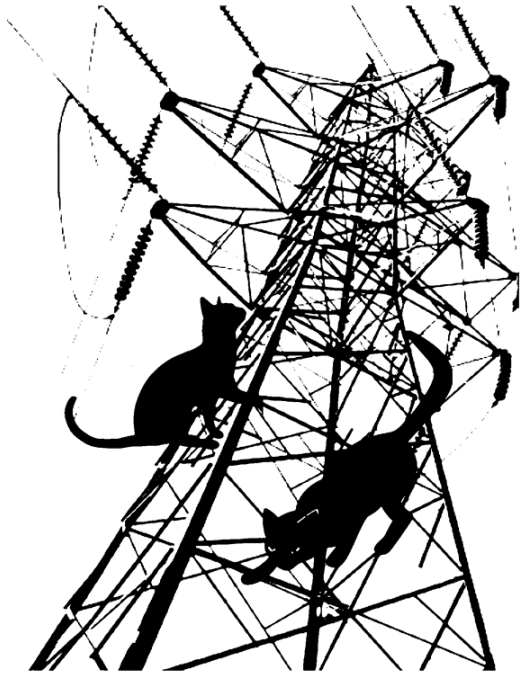
tan nuestros territorios, y que hoy son más cotizados si logran los estándares de la ‘minería de bajas emisiones’ o del ‘manejo forestal sostenible’.

Intervención temprana: una estrategia de pacificación

La carretera HVDC Kimal- Lo Aguirre amenaza los territorios, por eso, para adelantarse a las resistencias, las empresas ejecutoras han considerado una compleja estrategia de pacificación social, que les permita identificar focos de conflicto y gestionarlos. De hecho, ISA Interchile, aprendió de su experiencia con el proyecto ‘Cardones- Polpaico’, donde la movilización de las comunidades les hizo retrasar las obras, lo que les significó un pago de US\$ 83 millones por multa y cobro de garantías por parte del Estado.

De ahí su interés en una intervención temprana en los territorios, que, si bien supone inversión, aseguraría su rentabilidad final. Tanto ISA Interchile como Transelec han desarrollado políticas de sustentabilidad y relaciones comunitarias, para controlar a las comunidades y pueblos que defienden los territorios. Su estrategia es vigilar y compensar, vigilar y mitigar, movilizar ‘competencias blandas’, establecer redes de empatía y confianza.

Se trata de un elaborado trabajo de gobernanza corporativa, donde las empresas establecen vínculos que les permiten gestionar las



relaciones sociales y subjetividades. Ambas empresas declaran como prioritario su trabajo con las comunidades. En el caso de ISA Interchile, destacamos el programa corporativo Conexiones para el Desarrollo, que apunta a fortalecer la educación técnico-profesional en las carreras vinculadas a la energía en la Región de Coquimbo y que está operativo desde el 2021, en alianza con Fundación Chile. Este programa es una intervención directa en la formación de escolares de bajos recursos, que instala los valores empresariales, las lógicas del capitalismo verde, desplegando una compleja pedagogía de la sumisión, que normaliza la intervención territorial, mientras prepara mano de obra barata.

Otro ejemplo, es el convenio con INIA Intihuasi (Valle de Elki) para la viverización de 21 especies vegetales nativas, para generar un aproximado de 100 mil individuos que comenzarán a ser plantados a partir de 2022, estrategia con la que la empresa piensa 'generar valor sustentable' para las comunidades.

ISA Interchile, está construyendo una amplia red de alianzas que le permita gestionar a sus 'grupos de interés', para ello activa el trabajo con una serie de fundaciones, como Fundación Mi Parque, con quienes ya ha construido un parque en Altovalsol, y tiene otro en proceso en El Romero. A lo anterior sumamos, fuera del territorio elkino, el apoyo a Fundación Red Migrantes, El programa Conexión Puma, en alianza con la empresa Arauco, para la pro-

tección y conservación de 24.000 hectáreas de bosque nativo en la cordillera de Nahuelbuta, y el fuerte apoyo a la comunidad Indígena Diaguita Chipasse de Ta Tátara (Valle de Huasco) asociado al programa Diálogos que inspiran .

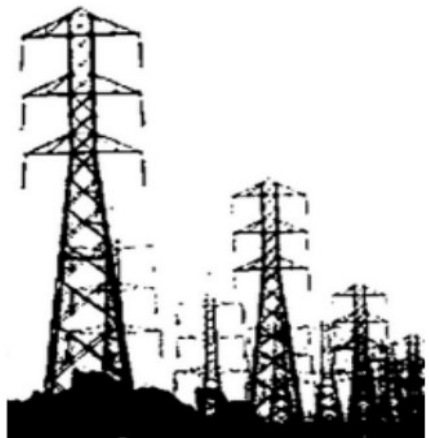
Todo lo anterior, se articula a un trabajo corporativo interno y comunicacional, que instrumentaliza temas de gran sensibilidad social como la equidad de género, diversidad sexual, discapacidad y pensamiento divergente.

De hecho, tras la fuerte conflictividad asociada a la ejecución de la red Cardones-Polpaico, ISA Interchile ha reestructurado sus equipos de trabajo, apropiándose de reivindicaciones sociales, despolitizándolas, instrumentalizándolas, con el claro objetivo de trabajar su imagen pública, pero también de generar compromisos y confianzas que sirvan para bloquear o canalizar el rechazo a la carretera eléctrica. Ya saben que lograr la RCA no es suficiente, por eso este trabajo anticipado, que parte con diagnósticos participativos y mesas de trabajo, que permiten conocer para vigilar y controlar.

Lo que se construye son relaciones de dependencia, muchas veces clientelares, que moldean las comunidades en función de las necesidades de las empresas. El ejemplo de ISA Interchile, no es un caso aislado, también lo podemos

ver en Transelec .

Lo importante es reconocer que antes de llegar con las torres, el consorcio ejecutor del proyecto HVDC Kimal- Lo Aguirre, está preparando una fuerte y violenta estrategia de pacificación social, que asegure la implementación de una mega-obra que potenciará las dinámicas de colonización y despojo territorial en la cuenca del Elki, y más allá. Luego de un polémico proceso de ‘casas abiertas’ finalizado el primer semestre de 2023, el consorcio ha ingresado el proyecto a Evaluación Ambiental. Evaluación que actualmente se encuentra en proceso.



LA PATRIA MINERA EN LAS LÍNEAS DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA



En las faenas de Minera Centinela, comuna de Sierra Gorda, región de Antofagasta, el grupo minero privado más importante de Chile, Antofagasta Minerals, de la familia más rica del país: La *family office* Luksic, fue responsable de elaborar las medallas de *corazón de cobre* que Chile entregó a los ganadores de los juegos panamericanos Santiago 2023. Pareciera una situación anecdótica, sin embargo, en este Chile neoliberal que se produce y se reproduce en los imaginarios de su elite empresarial, cada huella expresa las maneras con que el capital ejerce autoridad territorial, poniendo bajo sus auspicios un complejo entramado de relaciones entre Estado, mercado y sociedad civil.

Las medallas de *corazón de cobre* de la familia más rica de Chile, sintetizan y materializan la estructura de dominación capitalista chilena. Estructura internalizada en la subjetividad nacional por el discurso *Chile país minero*. La subjetividad de la patria minera, orgullosa de una historia de 190 años de explotación, se levanta en una narrativa eldoradista, que nos presenta un país abundante en recursos mineros.

Actualmente Chile es el mayor productor de cobre del mundo, con el 21% de las reservas mundiales y con una producción de 5.328 millones de toneladas mé-

tricas (que representa el 24% de la producción mundial).

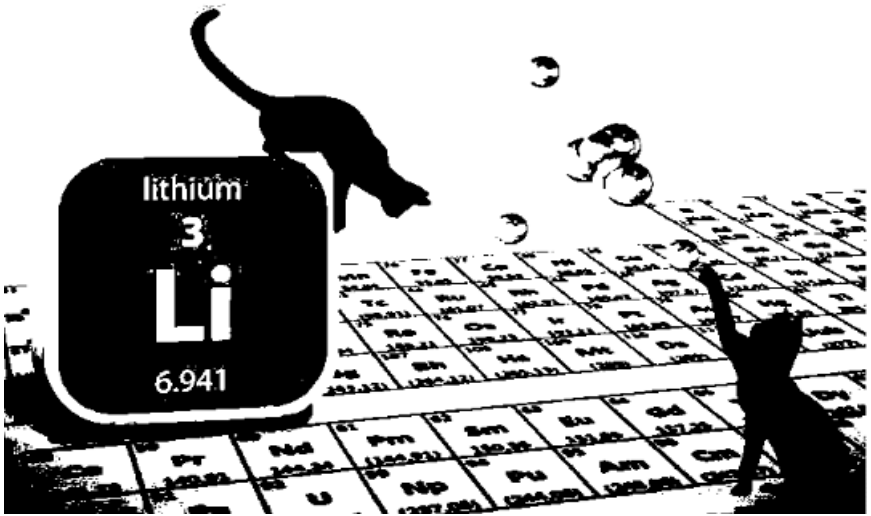
Si bien estas cifras no se comparan con las del período de mayor auge de la exportación del *commodity*, la minería sigue siendo un sector económico que crece sin interrupción. De hecho, el año 2022 el rubro creció un 25,3% con relación al año anterior, en minerales de cobre y oro. Por supuesto, las mayores inversiones son de empresas trasnacionales como Quebrada Blanca y Minera Escondida, y la estatal Codelco, que en términos prácticos opera como una transnacional.

La narrativa eldoradista se sintetiza claramente en las palabras de Alejandra Wood, exdirectora ejecutiva del *Centro de estudios del cobre y la minería (CESCO)* y miembro actual del directorio de Codelco, quien señala: ‘Si me hablan de minería pienso en el desarrollo para el país, desarrollo para las regiones mineras, desarrollo para el capital humano de Chile, movilidad social, infraestructura, crecimiento (...) Si Chile no tuviera minería no seríamos el país que somos’.

En las palabras de Wood, la *Patria minera* se nos presenta como hecho indiscutible: ‘Las regiones de la cuarta al norte respiran minería y por ende su rol en la generación de empleo hace imposible desconocer que Chile es un país minero’. En esta narrativa pareciera que el norte del país es un edén o tierra prometida, libre de contaminación, libre de escasez de agua, libre de explotación laboral, libre de discriminación racial y libre de las perversidades del narcotráfico. Al parecer Wood desconoce que nadie se baja por turismo en el sector La Negra (entrada sur de Antofagasta) o en Sierra Gorda, donde solo transitan cuerpos explotados, dominados y oprimidos por la *Patria minera*.

La narrativa de *Patria minera*, que se regocija en la gloria del progreso y el desarrollo, legitima actualmente el ímpetu por explotar el litio. Según cifras oficiales las exportaciones mineras de Chile son el principal motor de la economía nacional, representando el 60% de las exportaciones. De hecho, en términos monetarios, la minera metálica durante el año





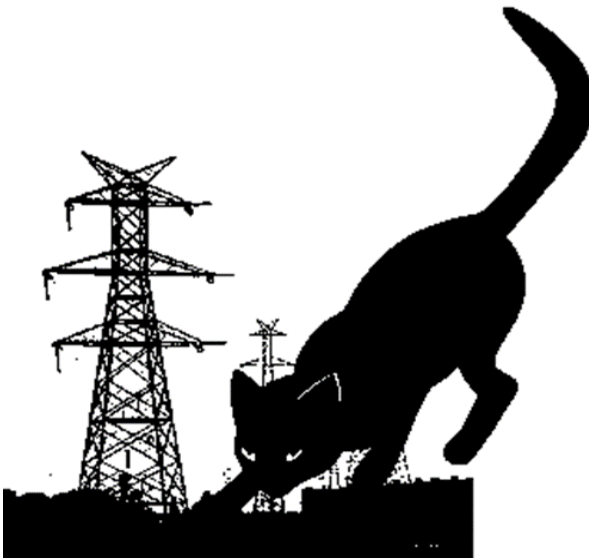
2022 registro un valor de exportación de más de 49 mil millones de dólares y la no metálica con el carbonato de litio como principal dinamizador, más de 9 millones de dólares

Es esta narrativa eldoradista la que sustenta la Estrategia Nacional del Litio presentada este 2023, según la cual 'Chile tiene una oportunidad histórica de ser protagonista global de la extracción de litio'. Con esta estrategia, nuevamente los dueños de Chile rediseñan los territorios y los sueños de los pueblos según sus intereses corporativos. El sueño eldoradista de la *Patria minera*, que confía en el chorreo hacia los pobres, nos presenta una contradicción ontológica ineludible: Chile, un país pobre y desigual con la mayor riqueza minera del siglo XXI, soñando con el protagonismo global de un nuevo ciclo de acumulación por despojo.

En este contexto, el Gran Consenso Minero Nacional se potencia con el nuevo ciclo extractivista bajo la retórica de la transición energética y la carbono neutralidad, que condena a los territorios de norte, aquellos que según Wood 'respiran minería', a la expansión e intensificación de la explotación. Así, los sueños de sustentabilidad y energías limpias de las sociedades del capitalismo central terminan siendo una paradoja colonial para nuestros pueblos en el sur global. Extraer más cobre y más litio significa asfixiar y secar los pueblos del norte, sacrificando sus posibilidades de existencia.

El compromiso salvacionista de la transición energética, cuya agenda Chile proyecta cumplir al año 2050, es una promesa que la *Patria minera* realiza desde la subordinación absoluta y también desde el sueño eldoradista que ve en las

en las demandas de la transición energética global, una nueva posibilidad de desarrollo. Como manifiesta José Miguel Ahumada, subsecretario de relaciones económicas internacionales, el desafío de Chile es entrar a una segunda fase exportadora: ‘centrada en ampliar la canasta exportadora (...) despertar nuevos sectores que están relativamente dormidos como la energía renovable, como el litio, como el hidrogeno verde’. Es decir, activar la economía nutriendo la demanda de materiales críticos y energías para la transición.



Actualmente en Chile se vive una vorágine de planes de intervención en diversos territorios, por ejemplo, la Comisión Nacional de Energía, a través del Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Nacional, ha puesto a disposición de inversionistas transnacionales (nacionales o extranjeros) una cartera de Concesiones Onerosas de Inmuebles Fiscales para el desarrollo de ‘*Proyectos de Energía Renovables No Convencionales en las Regiones de Antofagasta y Atacama*’, proyectando una producción de energía de más de 6.000 mega watts al año 2025. La

invasión de proyectos verdes, sustentables y de energías limpias están acorralando a territorios como Taltal, San Pedro de Atacama, Tocopilla y Camarones con la falacia de producir energías limpias para uso domiciliario o residencial, cuando en realidad el negocio de las renovables responde a las necesidades de los sectores industriales que representan el 73% de la demanda a nivel nacional. Ante esta

situación resulta urgente desmontar los mitos de la ecoeficiencia y la justicia energética que rodean a los negocios de energías renovables y que, hoy en día, actualizan los sueños de la *Patria minera*.

AGUAS PARA LA MINERÍA VERDE

LAS TRAMPAS RETÓRICAS DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

En el Chile neoliberal, la imposición de una transición energética corporativa está expandiendo violentamente las fronteras hídricas. Tras décadas de negacionismo y debate sobre el cambio climático, el empresariado extractivista ha optado por rentabilizar la crisis climática, asumiendo el liderazgo de una transición energética que habilita un complejo eco-ajuste de la economía global.

Este eco-ajuste abre un nuevo ciclo de colonización y despojo,

esta vez legitimado por las retóricas ‘verdes’ de sustentabilidad y ecoeficiencia.

En este contexto, al asimilar retóricamente la ‘descarbonización’ con la ‘electrificación’ de la matriz energética’ y confundir las ‘energías renovables’ con las ‘infraestructuras para las renovables’, se habilita un alza en la demanda de minerales, que da un nuevo impulso al extractivismo minero.



Efectivamente, las tecnologías asociadas a la captura y almacenamiento de energías renovables, como las infraestructuras para su electrificación y posterior circulación requieren grandes cantidades de minerales, metálicos y no metálicos. De hecho, para lograr electrificar el actual sistema energético global, sin cambiar las dinámicas de producción, circulación y consumo, se necesitarían 4 planetas de litio, 2 planetas de

de cobre y más de 2 de níquel, por dar algunos ejemplos. El punto que nos interesa enfatizar es que este nuevo escenario minero conlleva un alza exponencial en la demanda de agua.

Sin duda las proyecciones de mercado son auspiciosas para las corporaciones mineras, sobre todo las que explotan cobre y litio. En el caso del cobre, la Comisión Chilena del Cobre estima que la producción ascenderá a 5,7 millo-

nes de toneladas este 2023, cifra que sintoniza con los pronósticos de la consultora Wod Mackenzie, cuando señala que se necesitarán 9,7 millones de toneladas de nuevo suministro de cobre, durante 10 años, para cumplir el Acuerdo de París.

Mientras en el caso del litio, las cifras indican que en septiembre de 2022 SQM alcanzó un resultado histórico, al llegar a los 2.755,3 millones de dólares, a la vez que la venta de carbonato de litio al exterior creció en un 106% en enero de 2023. Cabe subrayar que las alzas se dan cuando aún no se supera la crisis multidimensional asociada a COVID19. Es en este escenario que el extractivismo minero se reinventa en formato 'verde' para aprovechar la oportunidad histórica que la misma debacle socioecológica que ha contribuido a generar le entrega. Pero para hacerlo le falta agua.

Durante décadas la megaminería ha agotado los acuíferos y también los ha contaminado, ha desviado los cursos naturales de aguas superficiales generando el riesgo de aluviones, y ha sacrificado glaciares, humedales y salares. El ritmo de extracción no ha permitido la recarga hídrica y las cantidades de agua demandadas no están disponibles, por lo menos en las 'regiones mineras' del norte. Surgen entonces las estrategias de eficiencia hídrica, que apuestan por la innovación tecnológica para expandir la frontera

hídrica, cuyo ejemplo más claro es el reemplazo de aguas continentales por aguas de mar desalinizadas.

Actualmente, 13 de las 23 plantas desaladoras del país son de empresas mineras, y se sabe de 15 nuevos proyectos en diferentes etapas de desarrollo, las que se concentran en la zona norte. De hecho, las proyecciones indican que la minería del cobre logrará operar con 71% de agua desalinizada este año 2023.

El auge de las desaladoras se legitima retóricamente por la oposición 'escases v/s abundancia', apelando a la supuesta abundancia infinita de los mares y la larga extensión de la costa chilena. Retórica que cosifica, fragmenta y descompone el ciclo hidrológico de la Tierra, al desvincular las dinámicas hídricas continentales y marinas. De esa manera se minimizan o invisibilizan los efectos ecosistémicos de las diferentes etapas del proceso de desalación, entre los que destacamos el cambio en las corrientes ambientales locales y la circulación de las aguas, la descomposición bacteriana de biomasa orgánica, la contaminación por salinidad y desechos químicos, y el aumento de la turbidez y coloración del agua, amenazando así las cadenas bióticas marinas.

A esos efectos se debe agregar el riesgo de filtración de salmuera en tierras continentales, y los

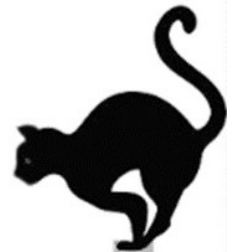
riesgos asociados al traslado del agua ya desalada desde las plantas de desalación en el borde costero hacia las faenas mineras, generalmente en la alta cordillera, traslado que supone más infraestructuras y más riesgos.

Más allá de los problemas señalados, está el problema del control que ejercen las corporaciones mineras en el territorio costero donde se instalan las plantas. De hecho, los emprendimientos mineros imponen una gobernanza corporativa a nivel de cuenca, expandiendo su poder de cordillera a mar.

En un escenario de transición energética, la ‘minería verde’ no solo está expandiendo la frontera hídrica, sumando nuevas fuentes de explotación de aguas, también en su búsqueda de ‘carbono-neutralidad’ desarrolla sus pro-

pias fuentes de energía, apostando por parques solares y/o eólicos, cuya construcción y mantención requiere también grandes cantidades de agua, además de intervenir tanto el terreno donde se instalan como aquellos que son atravesados por su infraestructura de conectividad.

Así, los parques industriales de energía solar y eólica, junto a las carreteras eléctricas que los conectan con las faenas mineras reconfiguran los territorios, desplazando poblaciones humanas y atentando contra la biodiversidad.



1	H																	He
2	Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
3	Na	Mg									Al	Si	P	S	Cl	Ar		
4	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
5	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
6	Cs	Ba	*	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
7	Fr	Ra	**	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Nh	Fl	Mc	Lv	Ts	Og
			*	La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Le
			**	Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr

Paradójicamente, en estas tierras áridas y semiáridas los ritmos y las rutas del agua son sacrificadas por mega-plantas de energías verdes, que alimentan la voracidad de una minería también verde.

La retórica de la ‘minería verde’ se nos presenta como una nueva estrategia de expansión colonial que capitaliza la crisis climática, la que es desvinculada de los complejos ciclos de reproducción de la vida, que toman forma en la interacción constante de la atmósfera, biosfera e hidrósfera. No basta con soluciones tecnológicas focalizadas en la descarbonización a nivel global, menos si esto supone potenciar las crisis hídricas locales. No es aceptable que desde los territorios históricamente saqueados y subalternizados, se subsidie la transición energética de las sociedades energívoras del norte global .



EXTRACTIVISMO ENERGÉTICO Y AGENDA REPRESIVA

Este 2 de agosto el ministro de energía Diego Pardow presentó el *proceso de construcción del plan de descarbonización*, que busca acelerar la salida de las termoeléctricas a carbón de la matriz energética chilena al año 2030. Unos días después, presentaba la *Hoja de ruta para el avance de la electromovilidad* y, tres semanas antes, al *Comité estratégico para el Plan de acción Hidrógeno Verde*.

De esta manera el gobierno chileno abre oficialmente lo que ha llamado el ‘Segundo tiempo de la transición energética’, cuya presentación pública se potencia con la gira europea realizada por Gabriel Boric a fines de julio, cuyo eje fue la promoción de Chile en los mercados de hidrógeno verde y materiales críticos para la transición energética, principalmente litio y cobre.

Estas acciones concretan la *‘Política energética 30-50’* presentada por Sebastián Piñera el 2017 y actualizada por Gabriel Boric el 2022. Se trata de una política neoliberal, orientada a una transición energética corporativa, liderada por el empresariado extractivista y que busca rentabili-

zar la crisis climática global. Esta política pretende posicionar a Chile como una potencia de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y de suministro de cobre, litio y otros materiales críticos para la transición en el norte global, para ello se está implementando un proceso de industrialización desmedida de plantas fotovoltaicas y eólicas, y también megaproyectos de conectividad como la carretera eléctrica Kimal-Lo Aguirre. A lo anterior se suma la articulación de esta política energética con la política nacional *‘Minería 2050’*, presentada a fines de 2022 y la *‘Estrategia Nacional del litio’*, presentada este 2023, que buscan intensificar el extractivismo minero, metálico y no metálico.





La implementación de estas políticas energéticas y mineras abre un nuevo ciclo para el neoliberalismo chileno, pues supone la configuración de nuevas zonas de sacrificio energético, orientadas a la acumulación privada de capital. Lo que se despliega es un proceso complejo de despojo, desplazamiento y devastación territorial, que acentúa las desigualdades ya existentes y pone en riesgo la reproducción de la vida.

Sin embargo, con estas amenazas, emergen también fuertes resistencias que, en nombre de la defensa del territorio, se movilizan poniendo en riesgo la ejecución de las obras y su implementación. Es en este contexto donde las nuevas políticas extractivistas chilenas, se articulan con una nueva agenda represiva.

De hecho, a 50 años del Golpe cívico-militar, Gabriel Boric actualiza el legado pinochetista desplegando violentas políticas contrainsurgentes como la *Ley Nain Retamal*, la *Ley Anti-tomas* (actualmente en tramitación) y la

Declaración de un estado de excepción Constitucional permanente en Wallmapu.

La *Ley Nain Retamal*, conocida popularmente como *Ley Gatillo fácil* establece la 'legítima defensa privilegiada' para las policías, facultándoles para disparar en las circunstancias que ellxs mismxs estimen necesario, asumiendo así la función de jueces 'in situ'. Esta ley empodera a las policías en su rol represivo, pasando por encima de la jurisprudencia global en D.D.H.H. Por su parte, la *Ley Anti-tomas*, conocida popularmente como *Ley Maldita*, castiga con penas privativas de libertad la ocupación permanente o transitoria de un inmueble o terreno; esto aplica a los campamentos pero también a las tomas de liceos, edificios públicos e instalaciones privadas como infraestructuras y tierras forestales; esta ley habilita a las policías para detener sin orden judicial a lxs ocupantes y en caso de herirlxs o matarlxs, lxs-funcionarixs policiales podrán quedar eximidos de su responsabilidad penal.

Como se ve se trata de leyes que legitiman el terrorismo estatal y potencian la criminalización de la protesta social. Considerando el rol protagónico de los movimientos de defensa territorial en los ciclos de protesta política que han marcado la historia reciente de las tierras bajo control del Estado chileno, podemos plantear que tanto la *Ley Nain Retamal* como la *Ley Anti-tomas*, operan como leyes de pacificación orientadas a garantizar las condiciones de 'orden público' para la implementación de este nuevo ciclo de colonización extractivista en los territorios.

A lo anterior se suma el Estado de Excepción Constitucional con el cual Boric ha implementado una violenta estrategia contrainsurgente en Wallmapu. El gobierno de Gabriel Boric ha intensificado la ocupación militar de las tierras mapuche, ha perseguido al movimiento autonomista e incrementado, como nunca antes, la cantidad de presos políticos en las cárceles chilenas, bajo condiciones que atentan no solo a los derechos indígenas, sino también a los mar-

cos más amplios de D.D.H.H.

Gracias al gobierno de Boric, el empresariado extractivista no solo ha recuperado su poder, debilitado por la Revuelta de 2019, sino que lo ha potenciado. Hoy en día, en estas tierras se padece el voraz avance de megaproyectos energéticos y también la violenta ofensiva de una agenda represiva que normaliza el terrorismo estatal, imponiendo el miedo como dispositivo de socialización, en un claro intento de bloquear y/o suprimir las luchas territoriales en defensa de la vida.



BARRICK GOLD AMENAZA LA CUENCA DE ELKI

La agenda global de transición energética ha abierto nuevos mercados para la megaminería metálica en tierras bajo control del estado chileno: los ambicionados *materiales críticos* para la producción de dispositivos de captación de energías renovables (solar y eólica) y sus redes de transmisión eléctrica. Con este aumento de la demanda, aumenta vertiginosamente el interés por nuevos yacimientos, lo que supone una fuerte inversión en prospección minera.

Es en este contexto que, en julio de 2023, la empresa canadiense Barrick Gold, a través de su filial en el Cono Sur, ha ingresado a tramitación ambiental el proyecto *Minera Campanario*, ubicado en la parte alta de la Cuenca de Elki, en las cercanías de la mina El Indio. Se trata de un proyecto de prospección para evaluar el potencial de mineralización de la zona. En concreto se proponen 116 sondajes, con una profundidad de 350 a 500 mts. y una duración promedio de 30 días cada uno. Las obras de sondaje consideran una inversión de 36 millones de dólares.

Paralelamente al ingreso a tramitación ambiental de este nuevo proyecto *Minera Campanario*, Barrick ha anunciado que se encuentra trabajando una nueva propuesta para Pascua Lama, con la intención de volver a tramitar dicho proyecto en Chile y Argentina.

Todo esto forma parte de una nueva ofensiva de Barrick Gold contra nuestros territorios, aprovechando las facilidades y oportunidades asociadas al modelo corporativo de transición energética implementado por el estado chileno. Los proyectos de Barrick Gold también se ven favorecidos por el avance en las obras de infraestructura de integración a ambos lados de la cordillera, y la ampliación del puerto de Coquimbo, que le garantiza una rápida circulación y salida a los mercados del Pacífico.



Barrick Gold es una empresa trasnacional con un amplio prontuario. La empresa fue fundada en 1983 por Adnan Kashoggi, traficante de armas saudí, y sirvió para lavar dinero de actividades ilegales en Inglaterra, Canadá y EE.UU. vinculadas a quien finalmente fue su mayor accionista en 1987, el húngaro Peter Munk. Años más tarde se suma George Bush, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y luego presidente de EE.UU. quien fue integrante del consejo asesor hasta su muerte.

Hoy Barrick Gold es la mayor empresa en explotación de oro a nivel mundial. Los verdaderos dueños de la empresa son varios fondos de inversión entre los que cabe mencionar: The Capital Group, grupo estadounidense vinculado a la familia Rockefeller. En su trayectoria, la minera ha sido responsable de una serie de prácticas criminales en todo el mundo, entre las que destacamos:

Desde 1990 comenzó el daño irreparable provocado con la mina Portera en Papua Nueva Guinea, donde vertió directamente al río sustancias tóxicas, incluyendo mercurio, transformando en solo 5 años un paraíso en el infierno mismo. Entre los años 2004 y 2005 en su mina Super Pit y Lago Cowal, ambas en Australia, contaminaron ríos enteros por el uso de cianuro lixiviado no tratado y por 'escapes o accidentes' de más de siete toneladas de mercurio, dejando una catástrofe para los pueblos y el ecosistema.

En la Cordillera de Los Andes en 2015, del lado argentino, los reiterados vertidos silenciados de cianuro se

volvieron un escándalo cuando un operario advirtió por whatsapp un derrame de aguas cianuradas en Iglesias, San Juan

Se calculan que fueron 1 millón 72 mil litros de solución cianurada derramada 'por accidente' hacia el río Potrerillos hasta llegar al río Jáchal. Por el derrame criminal ningún funcionario provincial ni CEO o gerente de la empresa Barrick fue sancionado. Solo operarios y trabajadores de tercer nivel. Tras el derrame de 2015 se sucedieron otros 4 derrames, conocidos, sin que nadie resulte responsable. Cruzando las montañas, es ya conocida la destrucción de glaciares y la devastación territorial en Huasco, causada por su proyecto binacional Pascua Lama que al día de hoy permanece impune.

Mientras se termina este cuadernillo, corre la cuenta regresiva para presentar las observaciones a la Declaración de Impacto presentada por la empresa. Desde la *Asamblea en Defensa de la Cuenca de Elki*, y otras organizaciones territoriales se pide desestimar la declaración y se exige que el proyecto sea sometido a un Estudio de Impacto Ambiental, ya que existen especies silvestres registradas bajo amenaza de extinción, 53 sitios arqueológicos y glaciares de roca que son los que garantizan, en una región sin lluvias, que haya humedad y ríos para que la vida sea posible.

“Si bien reconocemos la urgencia de la transición, consideramos que el modelo realmente implementado de transición energética opera como una trampa más del capitalismo energívoro, pues no resuelve la crisis climática y además renueva las dinámicas globales de despojo y acumulación. En este sentido, entendemos los discursos oficiales de la transición energética como una eco-retórica capitalista, orientada a desactivar las potenciales resistencias que conlleva la violenta expansión de las fronteras energéticas”

Alentamos la reproducción total o parcial de este texto, mediante cualquier técnica que permita su propagación. Reconocemos la autoría, pero negamos los derechos y la propiedad intelectual.

COLECTIVO
EL KINTRAL

✉ kolectivoelkintral@gmail.com

📷 [desprivatizandolarabia](#)

📺 [Desprivatizando La Rabia](#)